

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE	: GIOVANNA OROZCO YEPES
DEMANDADO	: METROPLÚS S.A. y EMPLEAMOS S.A.
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO (AUTO)
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-013-2018-00219-01
RADICADO INTERNO	: 031-21
DECISIÓN	: CONFIRMA AUTO
ACTA NÚMERO	: 082

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el recurso dentro del auto de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con el **Decreto 806 de 2020**: “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

En la fecha 2 de febrero de 2021, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, se constituyó en audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas, diligencia en la cual dicho Despacho se pronunció frente a las excepciones de prescripción, no comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios por pasiva y falta de jurisdicción y competencia.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado de conocimiento, se ABSTUVO de resolver la excepción de PRESCRIPCIÓN como previa y proceder a emitir pronunciamiento en la sentencia como excepción de mérito; se ABSTUVO de resolver la excepción previa de NO COMPRENDER LA DEMANDA TODOS LOS LITISCONSORTES NECESARIOS POR PASIVA; DECLARÓ NO PROBADA la excepción de FALTA DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Impuso costas a la accionada METROPLÚS S.A. por resultar vencida con la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia.

IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión adoptada, el apoderado METROPLÚS S.A. interpuso recurso de apelación, **en primer lugar**, frente a declarar improbadamente la excepción de falta de jurisdicción y competencia, con fundamento en el art. 85 de la Ley 489 de 1998; advierte que la jurisdicción y competencia en los conflictos donde es parte una entidad pública descentralizada, se encuentra regulada por el Decreto 01 de 1984 y el Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 1107 de 2006 actualmente la Ley 1437 de 2011, arts. 2 y 104. Resalta que su representada tiene naturaleza de entidad industrial y comercial del estado de orden municipal, con capital cien por ciento público, siendo ese el motivo y con base en las normas invocadas, que las controversias judiciales que se susciten y se plantean en los hechos y pretensiones de la demanda, deben ser asumidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Que las pretensiones de la demandante, se dirigen a la existencia del vínculo laboral con METROPLÚS como funcionaria pública de carrera administrativa, al solicitar en la pretensión octava, el reconocimiento y pago de la sanción por no consignación de las cesantías contempladas en la Ley 1071 de 2006, la cual aplica exclusivamente a los empleados y trabajadores vinculados mediante la carrera administrativa, en las pretensiones 3º, 4º y 6º, pretender la prima de vacaciones, prima de navidad y la bonificación de recreación, las cuales se encuentran establecidas en el régimen salarial y prestaciones de los empleados públicos de orden territorial, razones por las que considera que no es la Jurisdicción Laboral quienes deban conocer el proceso ordinario pretendido.

Y en segundo lugar apela decisión frente a la excepción de prescripción, por considerar que derechos que adquiere un trabajador como producto de la relación laboral, en los términos del Código Sustantivo del Trabajo, prescriben tres años después de haberse causado y adquirido, según lo establece el art 488 del CST, y con base en ello, la fecha que tiene relevancia es a partir del 20 de julio de 2014. Que la prescripción implica la pérdida por parte del trabajador y la cesión de la obligación por parte del empleador al perder la oportunidad para reclamar. Que teniendo en cuenta que la reclamación administrativa se presentó el 15 de febrero de 2017, solo tendría efecto para interrumpir la prescripción de la acción frente a los contratos que se presentaron en los tres años anteriores a la misma, es decir, al 14 de febrero de 2014 porque los demás contratos de prestación de servicios estarían prescritos.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de METROPLÚS S.A. reitera lo expresado en el recurso de apelación.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico a resolver, se centra en determinar si hay lugar a revocar la decisión que declaró improbadamente la excepción de falta de jurisdicción y competencia y si hay lugar a resolver de fondo la excepción de prescripción.

1. De la falta de jurisdicción y competencia

En efecto, de conformidad con las pretensiones incoadas por la demandante en el escrito de la demanda, se está solicitando se **declare la existencia de la relación laboral** desde el 4 de marzo de 2011 al 31 de julio de 2014, y como consecuencia se lo anterior, se condene al pago de prestaciones sociales, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación de recreación, indemnización por despido injusto, al pago de las sanciones por no consignación del auxilio de cesantía en un fondo de cesantías consagrado en la Ley 1071 de 2006, a la sanción por la falta de pago de las prestaciones sociales; el reembolso de lo pagado por aportes a la seguridad social y retención en la fuente; la actualización monetaria de los montos solicitados, y las costas procesales. Y en

el hecho 21 de la demanda se señala, que, conforme a lo narrado, existió en realidad un **contrato de trabajo a término indefinido entre la demandante y METROPLÚS S.A.** desde el 4 de marzo de 2011 al 31 de julio de 2014 en el que se **disfrazó la realidad bajo la forma de contratos de prestación de servicios** con el fin de evadir el reconocimiento de derechos y garantías de una relación laboral.

Y en este sentido, es necesario remitir al artículo 2º del CPT y SS que reza:

“ARTICULO 2o. COMPETENCIA GENERAL. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

*1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el **contrato de trabajo.** (...).”*

En posición pacífica, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el juez laboral tiene la competencia, verbigracia en la sentencia SL 5525-2016 Radicación No. 47.695, se manifestó diciendo que:

“...cuando un demandante le pide a la justicia laboral que declare la existencia de un contrato de trabajo, ello provoca un genuino conflicto originado «directa o indirectamente en el contrato de trabajo» (num. 1º, art. 2º C.P.T. y S.S.). De modo que, un asunto presentado en estos términos, es una materia que, a no dudarlo, le pertenece a la jurisdicción ordinaria laboral.

En sentencia CSJ SL10610-2014, reiterada en CSJ SL17470-2014, la Corte señaló que en eventos como el que acá se estudia, «la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral viene dada desde que el promotor del proceso en la demanda inicial afirma que tiene una relación laboral regida por un contrato de trabajo (ficto-presunto o expreso) con una entidad u organismo de la administración pública», de manera que es el demandante quien provoca o activa la competencia de esta jurisdicción al asegurar que su relación está regida por un contrato de trabajo.”

Por lo tanto, es claro que la parte accionante pretende el reconocimiento de un contrato de trabajo, por lo que, a todas luces, en principio se debe decir que la Jurisdicción Ordinaria Laboral es la competente para conocer las pretensiones invocadas en la demanda

Ahora, sostiene el apoderado de METROPLÚS S.A. que la entidad que representa, tiene naturaleza de entidad industrial y comercial del estado del orden Municipal, con capital cien por ciento público y por ello es la Jurisdicción

de lo Contencioso Administrativo el encargado de conocer el proceso que con convoca, e invoca el art. 85 de la Ley 489 de 1998, el cual reza:

“Empresas industriales y comerciales del Estado. Las empresas industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes características:

*a. **Personería jurídica;***

*b. **Autonomía administrativa y financiera;***

*c. **Capital independiente**, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la Constitución.*

El capital de las empresas industriales y comerciales del Estado podrá estar representado en cuotas o acciones de igual valor nominal.

A las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta, se les aplicará en lo pertinente los artículos 19, numerales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 27, numerales 2, 3, 4, 5, y 7, y 183 de la Ley 142 de 1994.(...)” (Negrilla fuera del texto)

Y adicionalmente, frente al régimen jurídico de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, en materia laboral, nos debemos remitir al art. 5º del Decreto 3135 de 1968, que señala:

“EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES. <Aparte entre paréntesis declarado INEXEQUIBLE> Las personas que prestan sus servicios en los Ministerios Departamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. (En los estatutos de los establecimientos Públicos se precisará que actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo).

Las personas que prestan sus servicios en las **Empresas Industriales y Comerciales del Estado son trabajadores oficiales**; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.” (Resalto hecho por la Sala)

Lo anterior lleva a concluir que la regla general, es que las personas que prestan sus servicios para las empresas industriales y comerciales del estado son trabajadoras oficiales y excepcionalmente son empleados públicos en el evento,

que la entidad acredite la actividad de dirección o confianza a efectos de desvirtuar la regla general.

Por lo tanto, si la regla es que, en este tipo de empresas, los trabajadores oficiales son la generalidad, si es posible que la Sra. GIOVANNA OROZCO YEPES, como consecuencia, de las pretensiones de la demanda busque su vínculo mediante un contrato laboral.

Aunado a lo anterior, como bien se extrae de la sentencia de primera instancia, otra de las razones por las cuales no le asiste la razón a la parte recurrente, es conforme el contenido del art. 4º del Decreto 2127 de 1945 el cual consagra lo siguiente:

*“No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, las relaciones entre los empleados públicos y la Administración Nacional, Departamental o Municipal **no constituyen contratos de trabajo**, y se rigen por leyes especiales, **a menos que se trate de la construcción o sostenimiento de las obras públicas, o de empresas industriales, comerciales, agrícolas o ganaderas que se exploten con fines de lucro, o de instituciones idénticas a las de los particulares o susceptibles de ser fundadas y manejadas por estos en la misma forma.**” (Negrilla fuera del texto)*

Por lo analizado, la Sala CONFIRMARÁ la decisión recurrida.

2. Del análisis de la prescripción como excepción previa

Considera la Sala que no hay lugar a que salga adelante el recurso interpuesto, teniendo en cuenta que el art. 32 del C.P.T y S.S, modificado por la Ley 712 de 2001, y luego por la Ley 1149 de 2007, que trata de las excepciones previas en materia laboral, es del siguiente tenor:

*“**Artículo 32.** Trámite de las excepciones. El juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción **cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión**, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-820 de 2011” (Negrilla fuera del texto)*

El querer del legislador del año 2001, fue evitar que un proceso, continuara un curso inane e innecesario, cuando se podría verificar con certeza que las pretensiones afincadas en eventuales derechos no podrían salir adelante porque ya había perdido obligatoriedad por el transcurso del tiempo o que la acción para demandar, no era viable porque había transcurrido el tiempo otorgado por la ley para acudir a la jurisdicción a hacer valer estos derechos.

Por lo anterior y en aras del principio de economía y del principio de celeridad, el juez como director del proceso judicial deberá pronunciarse sobre la excepción de prescripción propuesta como previa, sin que signifique que de hacerlo de forma negativa, se pierda la oportunidad de pronunciarse sobre la misma al final del proceso pues, claro es que la norma transcrita señala que esta pretensión puede salir avante siempre y “...**cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión**”.

Así las cosas, como en el presente evento nos encontramos frente a la pretensión de reconocimiento de un contrato realidad, a termino indefinido desde el 4 de marzo de 2011 al 31 de julio de 2014, y en oposición a ello, el apoderado de la entidad METROPLÚS S.A. hace referencia a la existencia de contratos de prestación de servicios, los cuales se encuentran prescritos los anteriores al 14 de febrero de 2014, por lo que claramente existe controversia en la fecha de exigibilidad de la pretensión.

De conformidad con lo manifestado, es por lo que se considera que a la A Quo no le es posible realizar un pronunciamiento frente a la excepción de prescripción en calidad de excepción previa, debiéndose CONFIRMAR la decisión de primera instancia.

Costas en esta instancia por valor de \$454.263 al no salir avante el recurso interpuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión emitida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDA: Costas en esta instancia por valor de \$454.263 al no salir avante el recurso interpuesto.

TERCERO: Déjese copia de lo resuelto en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de procedencia.

Lo resuelto se notificará por ESTADOS.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
– SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 062 del 15 de abril de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>